



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, treinta (30) de julio dos mil veinte (2020)

Medio de control:	Repetición
Radicado:	15001 33 33 009 2019 00221 00
Demandante:	Municipio de Tunja
Demandados:	Hugo Alberto Martínez Quintero y Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros

I. ASUNTO

El proceso ingresa al Despacho para pronunciarse sobre la admisión de la demanda presentada por el municipio de Tunja frente a los señores Hugo Alberto Martínez Quintero y Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros, encaminada a que se declare la responsabilidad patrimonial de los demandados, conforme a la condena impuesta en el medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, radicado No 2013-00088.

II. ANTECEDENTES

La demanda fue presentada a través de apoderada judicial el 28 de noviembre de 2019¹, siendo repartida para su conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja.

Mediante providencia de 10 de diciembre de 2019, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto y dispuso la remisión del proceso, en la medida que la condena impuesta al municipio de Tunja se profirió en el medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo No 2013-00088, que cursó en este Despacho.

A través de auto de 13 de febrero de 2020, este Juzgado avocó el conocimiento del asunto e inadmitió la demanda formulada por el municipio de Tunja, por carecer de requisitos legales y anexos, conforme a las disposiciones consagradas en el Ley 678 de 2011 y los artículos 162, 165 y 166 del CPACA, específicamente, en cuanto: i) No aportó prueba del pago de la obligación, por concepto de las costas procesales y ii) no acreditó la calidad del demandado Hugo Alberto Martínez Quintero, como particular en ejercicio de funciones públicas.

¹ Acta individual de reparto (f. 279)

Con escrito de 20 de febrero de 2020, la apoderada de la parte demandante presentó subsanación de la demanda y desistió de la pretensión tercera de la misma. Lo anterior, en la medida que aportó la certificación de 06 de junio de 2020, suscrita por la tesorera municipal en la que se registró que mediante comprobante de egreso No 201810996 de 27 de diciembre de 2018, se efectuó el pago de \$378.420.867, suma de dinero que incluyó el valor correspondiente a las costas de primera y segunda instancia del proceso radicado No 2013-00088. Asimismo, aportó documentos y copia de algunos actos administrativos, de los cuales se desprende la designación del señor Hugo Alberto Martínez Quintero como presidente del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del municipio.

Por medio del informe secretarial de 04 de marzo de 2020, el proceso radicado del asunto ingresó al Despacho para pronunciarse sobre la admisión de la demanda.

Ahora bien, mediante la Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos.

Como consecuencia de lo anterior, a través de Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el día 20 del mismo mes y año, salvo en aquellos despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tuvieran programadas audiencias con persona privada de la libertad. Adicionalmente, se exceptuó el trámite de acciones de tutela.

Esta medida de suspensión de términos judiciales se prorrogó en distintas ocasiones, mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA-11556 de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial.

Por medio de Acuerdo PCSJA-11567 de 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del día 1.º de julio de 2020, inclusive, y dispuso las medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y se dictaron otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

A través del Decreto Legislativo No 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Por último, mediante Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1.º de julio de 2020, y puntualizó que las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial no prestarán atención presencial a usuarios, a menos que de manera excepcional se requiera.

III. CONSIDERACIONES

Respecto a la inadmisión de la demanda, se tiene que la apoderada de la parte demandante con el fin de subsanar el escrito inicial desistió de la pretensión tercera, comoquiera que la certificación de 06 de junio de 2020 suscrita por la tesorera municipal, daba cuenta de que mediante comprobante de egreso No 201810996 de 27 de diciembre de 2018, se efectuó el pago de \$378.420.867, valor que incluía las costas de primera y segunda instancia del proceso radicado No 2013-00088.

Pues bien, en lo que atañe al desistimiento de las pretensiones el artículo 314 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA, establece:

*“Artículo 314. Desistimiento de las pretensiones. **El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso...***

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.

(...)

Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.

(...)

*Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o **municipio**, el **desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo.***

De la norma en mención se desprende que el desistimiento procederá cuando no se haya dictado sentencia de instancia, y que cuando en el extremo demandante se encuentre un municipio, el desistimiento de todas o de una pretensión debe estar suscrito por el alcalde. Ahora bien, por disposición del artículo 9.º de la Ley 678 de 2001 la acción de repetición no es desistible, sin embargo, según el

contenido del escrito de la parte demandante, el Despacho considera que puede pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud presentada, toda vez que el desistimiento se predica de una pretensión de la demanda y no del ejercicio de la acción como tal. Además, el contenido de dicha pretensión no es perseguir el reembolso de lo pagado por una condena originada en la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, sino el pago de las costas de primera y segunda instancia causadas en el trámite de la acción de grupo, es decir, que no se encauza de manera específica a la defensa del interés general o la protección de los recursos públicos.

Para el caso concreto si bien no se ha dictado sentencia de instancia y la apoderada de la entidad territorial se encuentra expresamente facultada para desistir, en virtud de las facultades otorgadas en el memorial de poder que obra folio 13 del expediente, el desistimiento no está suscrito por el alcalde municipal de Tunja, por lo tanto, la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el artículo 314 del CGP, y no hay lugar a su aceptación. De otra parte, comoquiera que la parte demandante optó por el desistimiento de la pretensión en lugar de la corrección de la falencia advertida en el auto inadmisorio de la demanda, el Despacho la rechazará en cuanto tiene que ver con la pretensión tercera, que a la letra dice:

“Que se condene solidariamente a la Arquitecta GIOVANNA MAYELLE LOBATÓN PIÑEROS, persona natural identificada con cédula de ciudadanía 23.623.612 de Guateque-Boyacá y al señor HUGO ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, persona natural identificado con cédula de ciudadanía No 7.165.885 de Tunja Boyacá a CANCELAR a favor del Municipio de Tunja la suma de: un millón quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$1.562.484), para un total de dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos veintiséis pesos (\$2.373.726) por concepto de pago de costas procesales de primera y segunda instancia que se vio obligado a cancelar el Municipio de Tunja, dentro del proceso de reparación de perjuicios a un grupo No 2013-00088.”

Respecto a las demás inconsistencias señaladas en el auto de 13 de febrero de 2020, el Despacho encuentra que las mismas fueron subsanadas, en la medida que la parte demandante acreditó el pago de la obligación por valor de \$378.420.867 y se aportaron los documentos de los que se desprende la designación del señor Hugo Alberto Martínez Quintero como presidente del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del municipio de Tunja, de manera que al reunir los requisitos previstos en la Ley 678 de 2011 y los artículos 162, 165 y 166 del CPACA, se dispondrá su admisión.

- **De la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020**

En consideración a que la demanda fue presentada con anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020, contentivo de normas procesales concernientes a la sustanciación de los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en virtud del principio general de la aplicación inmediata de las leyes procesales², corresponde dar aplicación a las previsiones del referido Decreto, norma que entró en vigencia a partir del 04 de junio del año que avanza.

El artículo 3.º del Decreto 806 de 2020 establece lo siguiente:

“Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial”

En este mismo sentido, el artículo 6.º *ibídem* dispone:

“La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

² Código General del Proceso. Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.

En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

Así las cosas, conforme a lo dispuesto en los artículos 3.º y 6.º del Decreto 806 de 2020, de manera previa a la notificación de la admisión de la demanda, se concederá a la parte demandante el **término de 10 días contados** a partir de la notificación de esta providencia, para que de manera simultánea envíe la demanda y sus anexos digitalizados en formato PDF a los demandados, al Ministerio Público delegado ante este Despacho (procjudadm177@procuraduria.gov.co) y a este Juzgado. De igual manera, para que indique los canales digitales dispuestos para notificar a las partes, sus representantes y apoderados, testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso.

Todos los memoriales y actuaciones que se realicen deberán remitirse al buzón de correo electrónico de los Juzgados Administrativos de Tunja: correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- No aceptar el desistimiento formulado por la apoderada del municipio demandante, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Rechazar la demanda presentada por el municipio de Tunja en cuanto tiene que ver con pretensión tercera, consistente en:

“Que se condene solidariamente a la Arquitecta GIOVANNA MAYELLE LOBATÓN PIÑEROS, persona natural identificada con cédula de ciudadanía

23.623.612 de Guateque-Boyacá y al señor HUGO ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, persona natural identificado con cédula de ciudadanía No 7.165.885 de Tunja Boyacá a CANCELAR a favor del Municipio de Tunja la suma de: un millón quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$1.562.484), para un total de dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos veintiséis pesos (\$2.373.726) por concepto de pago de costas procesales de primera y segunda instancia que se vio obligado a cancelar el Municipio de Tunja, dentro del proceso de reparación de perjuicios a un grupo No 2013-00088.”

TERCERO.- Admitir en primera instancia la demanda presentada por el municipio de Tunja frente a los señores Hugo Alberto Martínez Quintero y Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros, en ejercicio del medio de control de repetición, específicamente, frente a las pretensiones primera, segunda, cuarta, quinta y sexta, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- De manera previa a la notificación de la demanda, **conceder el término de diez (10) días a la parte demandante**, para que de manera simultánea realice el envío de la demanda y sus anexos digitalizados en formato PDF a los correos electrónicos de los demandados, al Ministerio Público y a este Despacho, e indique los canales digitales dispuestos para notificar a las partes, sus representantes y apoderados, testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.º del Decreto 806 de 2020.

En caso de no conocer el canal de digital de la parte demandada, se acreditará el envío físico de la demanda con sus anexos.

QUINTO.- Señalar a las partes y demás sujetos procesales que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, es su deber realizar las actuaciones procesales a través de medios tecnológicos, razón por la cual, en lo sucesivo, deberán dar cumplimiento a las normas allí previstas. Para tal efecto, todos los memoriales y actuaciones que realicen deberán ser enviados por las partes al buzón del correo electrónico: correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO.- Notificar personalmente a los señores Hugo Alberto Martínez Quintero y Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros, en los términos del artículo 8.º del Decreto 806 de 2020.

SÉPTIMO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto.

OCTAVO.- Notificar del contenido de esta providencia al demandante y a su apoderado, de conformidad con el artículo 201 del CPACA.

Notifíquese³ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

92eb211c768da7fd2186497dfe4408b864f4800f708937175aa0c25f2898dea5

Documento generado en 30/07/2020 01:35:56 p.m.

**Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja**

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 17
de hoy 31 de julio de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario